

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 14° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-103-2021  
CARATULADO : MUÑOZ/MINISTERIOSEREMI SALUD (FISCO DE CHILE)

Santiago, a un día del mes de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don Carlos Emilio Toloza Eguiluz, abogado, con domicilio en calle Cerro Colorado N° 5.240, Torre 1, piso 18°, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en representación de don **Carlos Alejandro Muñoz Carranza**, chileno, empleado, cédula de identidad N° 5.175.884-6, domiciliado en Avenida Gran Avenida Gral. José Miguel Carrera N° 14.000, Departamento 43, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, quien conforme a lo expuesto en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana, de conformidad con los antecedentes que a continuación se pasan a exponer.

I. Hechos que dan cuenta de la prisión política y tormentos

Señala que como quedará de manifiesto en el presente juicio los hechos descritos en el presente capítulo de la demanda han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (de ahora en adelante Comisión Valech I). Don Carlos Alejandro Muñoz Carranza figura reconocido como víctima de torturas y prisión política con el número de registro N° 674.

Relata que su mandante fue detenido sin orden judicial ni administrativa alguna y conducido a la Escuela de Infantería del Ejército de Chile ubicada en la comuna de San Bernardo donde fue torturado en reiteradas oportunidades. A continuación, expone los detalles de su cautiverio. El día 30 de septiembre de 1973, don Carlos Alejandro Muñoz Carranza, quien se desempeñaba como vendedor, y que militaba activamente



siendo Secretario General de la Juventud Radical Revolucionaria, se encontraba en su domicilio en Villa La Portada, Block B, departamento 43 comuna de San Bernardo, donde personal del Ejército de Chile procedió a detenerlo sin contar con orden administrativa ni judicial previa señalándole de inmediato por su nombre, trasladándose con una capucha en la cabeza hacia un sitio desconocido para él. En ese sentido la persecución iniciada por agentes del Estado estaba directamente direccionada en su contra por considerarlo opositor al régimen de facto imperante.

Agrega que en dicho contexto, una vez ingresado en el Regimiento ubicado en el cerro Chena, su representado estuvo en una sala junto a otros prisioneros que recuerda con los nombres de Joel Silva, Víctor Videla Godoy y Adolfo Ipinza Morales. Había como 30 personas más en aquella sala donde los mantuvieron amarrados y con las capuchas con las cuales habían sido trasladados. Una de las personas que también recuerda en su cautiverio fue Edgardo Riveros Marín, quien a la época de los hechos era militante de la Democracia Cristiana que pudo ver a su mandante en el recinto. Éste último prisionero con posterioridad sería Diputado y Subsecretario General de la Presidencia de Chile en dos mandatos presidenciales. Luego empezaron los interrogatorios preguntando por la ubicación de armas, el denominado “Plan Z” y los nombres de personas que estarían preparando una revuelta contra el régimen que se acababa de hacer del poder.

Añade que los militares lo interrogaron acerca de estos temas aplicando golpes en la cara con la pala militar, encapuchados los hacían formarse para simular un fusilamiento por haber traicionado la patria, y le pegaban con calcetines que llenaban con arena mojada. Las torturas se hicieron más intensas con los días, y fue llevado a un lugar que le llamaban fábrica de ladrillos al interior del campamento de prisioneros de cerro Chena, donde aplicaron electricidad con un dínamo en diversas partes de su cuerpo (lengua, pies, genitales y manos), insistiendo que les diera nombres de desertores de las filas del Ejército y detalles del denominado Plan Z. Probablemente, esto se debía a raíz de que su padre era Suboficial del Ejército a la época de los hechos y cumplía funciones al interior del ya citado Regimiento por lo que los interrogadores pensaron que él podría tener información privilegiada.



Narra que transcurridos once días de cautiverio, los militares le hicieron firmar una declaración donde indica que no fue sometido a ningún tipo de maltrato, y lo liberaron finalmente el día 10 de octubre de 1973 en la comuna de Calera de Tango en el cruce con Lonquén. Su padre trató de realizar desesperadamente las gestiones necesarias para su liberación y finalmente pudo tomar conocimiento de sus lesiones.

Precisa que durante su vida, con posterioridad a estos hechos, vivió un permanente acoso por parte de las Fuerzas Armadas, cuestión que llegó al extremo de tener que abandonar el país en noviembre de 1973, procediendo a radicarse en Venezuela y Argentina donde pudo estabilizar su vida, para posteriormente poder volver a nuestro país en marzo de 1980.

Asegura que su representado ha sufrido una profunda angustia por lo ocurrido, reviviendo su situación represiva con mucho dolor, recordando a las personas que alcanzó a ver con vida al interior del Campamento de Prisioneros de Cerro Chena, de los cuales varios fueron finalmente ejecutados y/o desaparecidos.

## II. El derecho aplicable.

### 1) Concurrencia de un ilícito internacional perpetrado por agentes del estado.

Refiere que los antecedentes relatados con anterioridad dan cuenta de la existencia de crímenes contra la Humanidad, con expreso reconocimiento en instrumentos internacionales que cristalizaron décadas de costumbre internacional, firme y persistente como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, los estatutos previos del Tribunal Militar de Nüremberg, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua- Yugoslavia y el para Ruanda. Cada uno de estos instrumentos reflejó en su normativa material y formal reglas de ius cogens que prescribía la sanción y persecución de un cúmulo de acciones que la humanidad no permitiría en todo tiempo y lugar. De allí que la tortura, como una modalidad de crimen contra la humanidad está reconocida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado por nuestro país, y en su articulado consagra: “Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con



conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”

Explica que desde esa perspectiva, estos delitos ignominiosos e intolerables para la humanidad -como estos hechos de tortura y que ahora se relatan- han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el presente caso.

Comenta que la Excma. Corte Suprema ya en múltiples oportunidades a fijado como criterio dominante el hecho de que: “Que, tratándose de delitos como los investigados, que la comunidad internacional ha calificado como de lesa humanidad, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del Estado, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno, en conformidad a la Constitución Política de la República. En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución



Política.” A su turno, como sostuvo el reciente fallo condenatorio contra el Estado de Chile en sede de protección regional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana en el fallo *Órdenes Guerra y otros vs. Chile*, sostuvo en lo pertinente en su considerando 92° que: “92. En efecto, el Estado comparte el criterio de que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción y que no puede excusarse en el mero paso del tiempo (fundamento de la prescripción) para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria. En este sentido, señaló que la jurisprudencia nacional ha integrado paulatinamente el derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento jurídico nacional, de modo tal que las modificaciones legales posteriores y la integración de los tratados internacionales en sus fallos han permeado la jurisprudencia del tribunal superior del país, que ha reconocido la admisibilidad de acciones judiciales de carácter civil del tipo referido. Parte de este tránsito se explica con la incorporación, en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, de una norma expresa que integra al ordenamiento jurídico los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, modificación que ha permitido a los tribunales de justicia dar aplicación sostenida a esta normativa.”

Manifiesta que en su caso existe una acción conducida por agentes del Estado pertenecientes al Ejército de Chile, que mantuvieron la privación de libertad bajo tormentos en perjuicio de don Carlos Muñoz Carranza derivando aquel episodio en una grave violación de derechos humanos constitutiva de un delito internacional indemnizable a partir de la propia actividad y reconocimiento del Estado en sede internacional.

2) La responsabilidad del Estado desde la Constitución Política de la República.

Esgrime que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2° y 3° y, en la actualidad, en la Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos. La doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de



derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos. En este sentido el profesor Eduardo Soto Kloss enseña que dicho principio general de responsabilidad del Estado emana de la circunstancia que el Estado chileno es una República, lo que implica que todos los sujetos tanto públicos como privados deben responder de sus actos y omisiones por encontrarse insertos en un Estado de Derecho.

Razona que esto tiene como consecuencia directa que cualquier sujeto que se sienta agraviado o lesionado por actos de los órganos públicos puede demandar a los tribunales de justicia el resarcimiento de los perjuicios conforme al estado de derecho democrático. Lo dicho por la doctrina se fundamenta en el principio de igualdad que plasmaba ya el artículo 10 N° 1 de la Constitución de 1925, pues es inconstitucional que un sujeto de derecho sea lesionado y perjudicado sin ser indemnizado en relación con otros sujetos a los cuales no les afectan los actos u omisiones ilícitos del órgano estatal.

Entiende que la consagración del gobierno republicano y democrático se plasma de manera explícita en el artículo 1° de la Constitución de 1925 que señala: El Estado de Chile es unitario. Su gobierno es republicano y democrático representativo.

Agrega que los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N° 1 y 10 N° 9. El artículo 4 de la Constitución de 1925, fuente directa de los actuales artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980, establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las prerrogativas y facultades que les entregaba la ley y los actos que excedieran sus atribuciones adolecían de nulidad. Si bien no se agregaba que de dichos actos nulos originaban las responsabilidades que la ley señale, no puede entenderse de otra forma, pues sabido es que la nulidad de los actos conlleva siempre y en todo caso la indemnización de los perjuicios causados a resultas de la nulidad. En cuanto a lo preceptuado por el actual artículo 6 de la Constitución de 1980 que, como ya se dijo, posee su fuente en el artículo 4 citado, existe meridiana claridad de que los órganos del Estado siempre deben sujetar su actuar a la preceptiva constitucional y a las leyes,



pues si fuera otra la interpretación no se entendería el principio de supremacía constitucional. Por lo demás el principio de sujeción a la Constitución se plasma en el artículo 2 de la Constitución de 1925 que dispone: “La soberanía reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta constitución establece.”

Señala que el artículo 38, inciso 2º, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica. Existe responsabilidad extracontractual que tiene origen en un hecho ilícito, a raíz del cual se ha originado un daño, existiendo relación de causalidad entre la acción del funcionario público y el daño producido. La acción civil tiene su origen en un delito de lesa humanidad y por eso tiene un carácter humanitario. La Ley de Bases Generales de la Administración señala que el Estado será responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado. La Excma. Corte Suprema de Justicia ha sentenciado que “(…) la responsabilidad del Estado por actos de la administración [...] emana de la naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones que debe desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones, se sometan a normas y principios de la rama del derecho público” (Cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 26.01.05, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol N° 3.354-03, Considerando N° 11).

3) La responsabilidad del estado a la luz del derecho internacional.



Arguye que el Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Tal como lo ha reconocido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la obligación de los Estados de reparar a víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos tiene un desarrollo fuerte en materia de soft law, que se ve reflejado en algunos instrumentos, resoluciones y opiniones de organismos internacionales que a continuación señala y cita: En 1989 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, señaló, en sus Observaciones Generales respecto del artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que las “acciones civiles de indemnización no [...] estarán sujetas a la prescripción.”

Ilustra que el Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló que: “la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las consecuencias de las violaciones flagrantes [...] son el resultado de los crímenes más odiosos que, según opiniones jurídicas muy acreditadas, no deben estar sujetos a prescripción. Además, está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo.”

Indica que el Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, adoptados en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incluyó lo siguiente: “Principio 23. Restricciones a la prescripción. La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá



correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación. [...] Principio 32. Procedimientos de reparación. Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el principio 23.”

Cuenta que en 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Los principios 6 y 7 de dicho instrumento indican: “6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional. 7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.” Ahora bien, respecto a la fuente directa de obligación que exige al Estado chileno reparar en casos de graves violaciones a los derechos humanos, es pertinente acudir a la Constitución Política que reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, sobre el particular, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 5, inciso 2° de la Carta Fundamental, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.



Colige que dicho precepto, permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

En tal escenario, tenemos que la naturaleza de acción pretendida excede con creces en el marco de la regulación interna sobre prescripción extintiva de las acciones civiles, el cual representa un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, por lo que es necesario recurrir a normas que emanan del derecho internacional de derechos humanos y del *ius cogens* o reglas imperativas de derecho internacional. En consecuencia, la aplicación de las normas de responsabilidad civil extracontractual contenidas en nuestro derecho interno pugnan con la obligación de resarcir íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad, que ciertamente incluye el ámbito patrimonial, obligación que se contiene en normas de derecho internacional de derechos humanos incorporadas a nuestra Constitución Política de la República por mandato de su artículo 5. En atención a lo dicho, las reglas de derecho internacional deben tener una aplicación preferente, según mandato del citado artículo, por sobre las disposiciones de derecho interno que permitan eludir responsabilidades al Estado y no reparar íntegramente el daño causado a las víctimas. Esto se aviene con lo establecido en la Convención de Viena, sobre derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que en su artículo 27 dispone que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, y que, de hacerlo, cometen un ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Se concluye así que la fuente de la responsabilidad civil del Estado con ocasión de violaciones de los derechos humanos se encuentra en principios y normas de derecho internacional de derechos humanos.

Revela que así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que “cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta



Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados; dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5 de la carta política, sin que sea posible estimar que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, lo que importaría transgredir preceptos constitucionales.

#### 4) Imprescriptibilidad de la acción civil.

Desarrolla que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar, según hemos visto, a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible.

Asevera que la responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil. En este sentido el profesor Eduardo Soto Kloss ha expresado en el volumen II de su reciente obra Derecho Administrativo, Bases Fundamentales, El principio de Juridicidad, p. 284, que "...la aplicación de fórmulas privatistas a la relación entre Estado (Administración) y agraviado particular (natural o jurídico), que nace del daño cometido por aquél, no es una relación de derecho privado - que son reguladas por el Código Civil- sino una relación jurídica pública, que obedece a otros principios (que son de derecho público) y, en consecuencia, necesita de otras soluciones para encontrar lo justo concreto que resuelva el conflicto originado por dicho daño".

Continúa que en el mismo sentido del artículo del mismo profesor, intitulado Bases para una teoría general de la responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho chileno, en Gaceta Jurídica N° 56/1985 señala "que hacer aplicable esas disposiciones -título XXXV del libro IV del Código Civil- implica un error técnico evidente y lo



que es peor aún, un falseamiento del problema mismo de la responsabilidad del Estado, que no gira sobre la idea de un sancionar a un culpable (como ocurre en la legislación civil), sino sobre la idea de restituir a una víctima en la situación anterior en que se encontraba antes de sufrir el daño antijurídico, y que no estaba jurídicamente obligada a soportar” A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores también ha recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, por ende, de las reglas en materia de prescripción. Así, en una de las muchas causas, con el ingreso N° 24.288-2016, la Corte Suprema en sentencia de 5 de septiembre de 2016 declaró que: "pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes como los de la especie, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente, por cuanto la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, al estipular en el artículo 4° que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código, lo que es pertinente a las nuevas realidades y situaciones emergentes, como sucede en este caso, al tratarse de una materia con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse, pues se trata de una rama emergente, representativa de una finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, por lo que se aparta de los postulados que son propios del derecho privado.

Enfatiza que la ausencia de una regulación jurídica interna para determinadas situaciones vulneratorias de derechos humanos impone al juez integrar la normativa existente con los principios generales del derecho internacional en la materia, que reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos.

Sostiene que la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido y



reafirmado, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado. A mayor abundamiento, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Undécimo: Que, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como resuelve el fallo impugnado, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad.”

Sintetiza que en suma, las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resultan aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en nuestro caso también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la Constitución de 1925. Ergo la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible.

##### 5) Concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos

Expresa que en lo que a responsabilidad civil propiamente tal refiere el principio general de todo estatuto de responsabilidad civil, dispone que toda persona debe indemnizar los perjuicios que sufran terceros, cuando tales perjuicios han sido causados



como consecuencia de la violación de un deber jurídico del primero. Lo anterior, en cuanto a los elementos de la responsabilidad extracontractual, se desprende de los artículos 2284, 2314 y 2329 del Código Civil, de acuerdo a los cuales, para que un hecho u omisión engendre responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un acto u omisión ilícita y culpable por parte del demandado; b) Que ese hecho u omisión cause un daño; y, c) Que entre el acto u omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de causalidad. Tal como se señalará a continuación, todos estos elementos concurren en los hechos que fundamentan la presente demanda.

Afirma que en el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados:

a) Se ha demostrado expresamente que nos encontramos frente a un hecho ilícito realizado por agentes del Estado. En efecto, la acción u omisión emana de un órgano del Estado, agentes del Estado torturaron a su mandante sin que haya demostrado la sujeción a procedimiento alguno. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal.

b) Asimismo, en cuanto al daño sufrido, y como se verá con mayor profundidad al analizar el daño moral, este debe ser presumido. Con todo, resulta evidente que verse enfrentados a hechos como los descritos producen un evidente daño, hecho que puede ser desconocido por la demandada sin causar una nueva retraumatización y un nuevo daño a su representado al verse enfrentados a la negativa del Estado a reconocer el daño sufrido.

c) Luego, en lo que respecta a la causalidad, resulta evidente que el daño sufrido por mis representados emana, precisa y únicamente, de la perpetración del hecho ilícito.

6) Procedencia de la indemnización del daño moral.

Consigna que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común.



Aclara que la indemnización comprende -según el artículo los artículos 2314 y 2329 del Código Civil- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral. La procedencia de la reparación del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional, ya a estas alturas resulta indiscutible.

Señala que de acuerdo con los hechos descritos en la primera parte de la demanda, el actuar de los dependientes de la demandada, ha sido la causa directa y necesaria del daño producido a su representado. Basta con la sola descripción de lo sucedido, para advertir que, a consecuencia de su actuar, se ha producido un profundo daño síquico y anímico. A mayor abundamiento, el daño moral puede ser entendido como el dolor físico y psicológico que vive una persona frente al daño (concepción clásica) o como todo daño que corresponda a una partida extrapatrimonial (concepción actual). Con todo, independiente de la concepción que se adopte, lo cierto es que la indemnización por daño moral presenta caracteres diferentes a la que se concede por daños patrimoniales que persigue recomponer, mediante una reparación en dinero, la situación patrimonial que tendría la víctima de no haber ocurrido el hecho ilícito.

Afirma que, tratándose del daño moral, es necesario señalar que es por esencia extrapatrimonial y tradicionalmente se le define como el dolor, la aflicción, el pesar que causa a la víctima el delito o hecho ilícito, que no la lesiona patrimonialmente, sino en sus sentimientos, sus afectos o creencias. En este tipo de daño, aquello que se pierde o deteriora no tiene un valor de intercambio que pueda servir para reparar la pérdida por equivalencia; en este caso, la indemnización sólo puede tener una función compensatoria del daño con un beneficio, reconociendo una ventaja pecuniaria a quien ha debido soportar esa carga. En otras palabras, el dinero que el ofensor paga a la víctima no será la representación exacta del dolor que ésta experimente, pero le servirá para compensarlo procurándole los medios de aliviarse de él, si es físico, o de buscar otras ventajas o satisfacciones que le permitan disiparlo, o, en todo caso, atenuarlo o hacerlo más soportable. Que en definitiva siendo el daño moral un asunto de orden espiritual, es claro que no admite esta apreciación aritmética o preparatoria, por lo que nosotros la fijamos prudencialmente teniendo en consideración el efecto paliativo que esta tendría o compensatorio en la medida de lo posible del sufrimiento que su



representado ha sobrellevado todo este tiempo por culpa del actuar negligente y abusivo de los demandados.

Narra que así, se ha fallado que "el daño moral es una materia discrecional y de apreciación privativa de los jueces de instancia; para dar por establecida su existencia basta con que el juez estime acreditada la causa que lo genera y el nexo de parentesco o relación de quien lo impetra. En consecuencia, en el cuasidelito de homicidio sólo es necesario tener por probada la muerte de la víctima por la acción de quien la produce y el parentesco de la víctima con los que reclaman" (Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXVII. Segunda Parte, Sección Cuarta, pág. 6).

Ilustra que en la actualidad ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos -tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria- no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) "resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes(...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Caso Moiwana . Reparaciones. Sentencia de 15 de junio de 2002. Serie C).

Concluye que con todo, en el caso de autos nos enfrentamos ante un especialísimo caso de daño moral, toda vez que se trata de una tortura sufrida por su representado por miembros del Estado, es decir, por agentes del órgano máximo de consolidación democrática, a quien se le ha entregado el monopolio de la fuerza y de quien legítimamente se puede esperar una omisión de acciones como las descritas. Así, los hechos a los que se vio expuesto su representado y los daños sufridos, el dolor, la aflicción, el desconsuelo, la desolación, las expectativas incumplidas, el quiebre de su familia y, en general, por el detrimento afectivo y emocional experimentado resulta incalculable, pero sólo para efectos de esta demanda se avalúa en la suma de \$200.000.000. Fluye de todo lo ya señalado que el Estado de Chile debe responder por



el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por su mandante.

Por tanto, y de conformidad a lo establecido en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y normas legales citadas, solicita tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del **Fisco de Chile**, representado, -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Juan Antonio Peribonio; acogerla a tramitación, y -en definitiva- aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a don **Carlos Alejandro Muñoz Carranza**, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que se estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.\_

Con fecha 22 de marzo de 2021, a folio 5, el tribunal dio curso a la demanda en juicio ordinario y confirió traslado al demandado.

A folio 12, con fecha 25 de octubre de 2021, consta certificación de Ministro de Fe, que da cuenta de haber notificado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de Código de Procedimiento Civil a don Juan Antonio Peribonio, Representante Legal del Fisco de Chile. La diligencia fue realizada por el Receptor Judicial don Santiago Moya Victoriano.

Con fecha 12 de noviembre de 2021, a folio 13, comparece doña Ruth Israel López, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda deducida en su contra, solicitando su rechazo, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

#### I.- De la demanda.

Hace alusión a que Se interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando sea condenado a pagar la suma total de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos), más reajustes e intereses correspondientes y costas, como reparación por daño moral con motivo de haber sufrido detención ilegal,



apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, cometidos por agentes del Estado ocurridos a contar del 30 de septiembre de 1973 por 11 días. Invoca como fundamento normativo los artículos 1º, 5º, 6º, 7º, de la Constitución Política; artículos 2319 y 2329 del Código Civil y tratados internacionales sobre de derechos humanos, citando la Convención de Ginebra, entre otros.

II.- Excepciones, defensas y alegaciones que se oponen a la demanda

II.1.- Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Opone a la acción deducida, la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor de autos:

a) Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.

Aduce que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Comenta que en efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años



buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Agrega que en este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

#### II 1.2) La complejidad reparatoria.

Alude que como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”

Amplía que en lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el



Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”. Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Sostiene que de esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Desarrolla que así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.



Precisa que en ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará al tribunal a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

#### II.1.3) Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Apunta que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Es necesario destacar que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Esclarece que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

- a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);
- b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y



c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, explica que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Aprecia que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

#### II.1.4) Reparaciones específicas.

La ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos. En lo tocante al caso que nos ocupa, señala que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N<sup>o</sup>s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Se expone en que la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Adicionalmente, consigna que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000. De esta forma, conforme se acreditará en la



etapa procesal pertinente, el actor ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

II.1.5) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

Relata que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Ilustra que a nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892. Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992. Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren



los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Menciona que igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Agrega que asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

#### II.1.6) Reparaciones simbólicas.

Describe que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Vierte que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, expresa que debe descartarse que sea una



reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”. En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

- a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;
- b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.
- c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.
- d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.
- e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el



camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

II.1.7) La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

Arguye que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. En este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal” . Lo anterior ha sido ratificado por la Excm. Corte Suprema



que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que: “Décimo Noveno: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde



a la de la demandante, quien –como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos” .

Narra que en el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas” , lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En efecto, indica que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra pár. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial (...)” .

Cuenta que en este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.



Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluye que, estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opongo la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

## II.2.- Excepción de prescripción extintiva.

Además de la excepción de reparación integral alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos.



## II.2.1) Normas de prescripción aplicables.

Opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Conforme al relato efectuado por la actora, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, hechos ocurridos hasta 10 de octubre del año 1973. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 25 de octubre de 2021, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

## II.2.2) Generalidades sobre la prescripción.

Alega que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible.” Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la



jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.” Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, argumenta que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo” . Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Explica que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

#### II.2.3) Fundamento de la prescripción.

Discute que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el



ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones, consigna que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, aclara que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa. En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

#### II.2.4) Jurisprudencia sobre la prescripción.

II.2.4.1 La sentencia del pleno de la Excm. Corte Suprema de 21 de enero de 2013. Como es de público conocimiento, nuestra Excm. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva; Señala al respecto el fallo: “Octavo: Que la prescripción constituye un



principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia” .

20) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal; Al efecto, el citado fallo dispone: “Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991.” “Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en



controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido.” “Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio.” “Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.”

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años



desde la perpetración del acto; Así, junto al considerando octavo antes citado, dispone el fallo en su considerando décimo que: “Décimo: Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto” .

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de los demandantes en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; Las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por esta defensa, lo que solicitamos se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

#### II.2.5) Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

Discurre que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.



Continúa que en efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

II.2.6) Normas contenidas en el Derecho Internacional.

Finalmente, aun cuando la demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Puntualiza que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema– que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Sigue, que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal. La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores



de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Precisa que la Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Suma que por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile. Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia. El planteamiento de la defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. En efecto, la Excm. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar: “Vigésimo Quinto: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San



José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N<sup>o</sup> 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991.” “Vigésimo Sexto: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5<sup>o</sup> inciso 2<sup>o</sup> de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquélla en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables. Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada – basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso” .

Asevera que lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile” , autos ingreso N<sup>o</sup> 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

Alega que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado. Con el mérito de lo expuesto precedentemente se deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

II.3.- En cuanto al daño e indemnización reclamada.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido de \$200.000.000.

II.3.1) Fijación de la indemnización por daño moral.



Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. En términos generales, señala que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Narra que ha dicho la Excma. Corte Suprema: “Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido” . Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.



Aduce que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Ratifica que es más, la I. Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudirse al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad. En efecto, en la sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891 – 2013, la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió: “Cuarto: Que ante tales argumentos, surge el problema de determinar la real cuantía de dicho daño moral, que como se ha dicho no se puede desconocer, su existencia en el caso, pero si bien, tal actividad se dificulta, por la generalidad de los hechos expuestos en la demandada, sin que se haya precisado cada uno de ellos y la total extensión del perjuicio -lo que permitiría efectuar algún grado de distinción o diferenciación- esta situación no puede ser óbice para alcanzarlo, por lo que se ha de recurrir a la prudencia, la que nunca debe ser desproporcionada, por lo que ésta Corte fijará la cuantía de tal reparación en \$3.000.000 para cada uno de los actores referidos en el considerando vigésimo sexto” .

II.3.2) En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En efecto, en subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales



que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Razona que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hace presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

#### II.4.- Improcedencia del pago de reajustes e intereses.-

Además de lo alegado, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Enuncia que a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Enfatiza que respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Resalta que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1°, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, “En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a



la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio.” Por consiguiente, el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Por tanto, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 02 de diciembre de 2021, a folio 16, el tribunal tiene por contestada la demanda y confiere traslado para la réplica.

Con fecha 09 de diciembre de 2021, la demandante evacúa el trámite de la réplica, ratificando íntegramente todo lo expuesto en la demanda de autos, tanto en los hechos como en el derecho; y contravirtiendo expresamente todas las afirmaciones de hecho y de derecho que se contienen en el escrito de contestación de la demanda, agregando que corresponde a la contraria la tarea imposible –por no ser efectivos- de acreditar sus dichos. No incorpora hechos sustantivos nuevos a la causa.

Con fecha 16 de diciembre de 2021, a folio 19, el tribunal tiene por evacuada la réplica y confiere traslado para la dúplica.

Con fecha 23 de diciembre de 2021, a folio 20, comparece el demandado, quien pide tener por evacuada la dúplica, reiterando todas las alegaciones, excepciones y defensas planteadas en el escrito de contestación a la demanda y con el mérito de ellas solicita el rechazo de la acción deducida.

Con fecha 01 de febrero de 2022, a folio 21, el tribunal tuvo por evacuado el trámite de la dúplica.

Con fecha 03 de marzo de 2022, a folio 23, el tribunal recibió la causa a prueba por el término legal. Dicha resolución consta notificada a las partes, según el atestado



receptorial, acompañado en autos bajo el folio 24 de fecha 10 de junio de 2022 y resolución de folio 27, de fecha 19 de julio de 2022, respectivamente. La interlocutoria fue objeto de reposición por parte de la demandante, impugnación que fue rechazada por medio de la providencia dictada el 04 de agosto de 2022, bajo el folio 31.

Con fecha 09 de noviembre de 2022, a folio 45, el tribunal citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que comparece don Carlos Emilio Toloza Eguiluz, abogado, en representación de don **Carlos Alejandro Muñoz Carranza**, empleado, quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios en juicio de Hacienda en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio; por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto por parte de funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, solicitando el pago de la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos), más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que se estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, todo con costas; de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en su libelo de demanda, los que han sido precedentemente reseñados en lo expositivo de esta sentencia y se dan por reproducidos en este considerando.

**SEGUNDO:** Que legalmente emplazado, el demandado Fisco de Chile contesta la demanda solicitando su total rechazo, deduciendo las excepciones de reparación integral y la prescripción extintiva de la acción deducida, y en subsidio, la rebaja del monto indemnizatorio pretendido; todo lo anterior conforme a lo relacionado en lo expositivo de esta sentencia.

**TERCERO:** Que la demandante, a fin de acreditar su pretensión, aparejó los siguientes documentos:

1.- Copia de escritura pública de Mandato Judicial, otorgado por don Carlos Alejandro Muñoz Carranza a don Carlos Emilio Toloza Eguiluz, con fecha 21 de octubre de 2020, ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, Suplente del Titular de la



Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, don Félix Jara Cadot. Repertorio N° 20.275-2020.

2.- Certificado otorgado por el Instituto de Derechos Humanos, con fecha 27 de febrero de 2020, que certifica que don Carlos Alejandro Muñoz Carranza, cédula de identidad número 5.175.884-6, se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. Hay pie de firma de Leonardo Urrutia Álvarez, Área de Memoria, Archivos y Documentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se adjunta listado, con timbre del referido Instituto, en donde el demandado figura junto al número 674.

3.- Copia extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990.

**CUARTO:** Que en el primer otrosí del escrito presentado por la parte demandada a folio 13, aquélla solicitó se oficiara al Instituto de Previsión Social, a fin de que informara sobre los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que don Carlos Muñoz Carranza ha obtenido en relación a las Leyes Nro. 19.123, 19.234, 19.992, 20.874 y demás pertinentes; a lo que el Tribunal accedió por resolución de folio 16.

**QUINTO:** Que consta recepción, a folio 18, de Oficio DSGT N° 4792-4545 de fecha 14 de diciembre de 2021, proveniente del Instituto de Previsión Social, documento que acompaña anexo con detalle de beneficios de reparación Leyes N° s 19.992 y 20.874, recibidos por don Carlos Muñoz Carranza, Run N° 5.175.884-6, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech). Refiere el documento, que la persona señalada no ha recibido otros beneficios de reparación en dicho Instituto. El anexo señala que ha recibido en la categoría TP Valech; Períodos emitidos: 07/2005 a 12-2021; Pensión Ley N° 19.992: \$31.665.286; Bono Ley N° 19.992: ---; Bono Ley 20.874: \$1.000.000; Aguinaldos: \$400.374. Total a la fecha: \$33.065.660; Pensión Actual: \$226.055.



**SEXTO:** Que a folio 43, con fecha 19 de octubre de 2022, consta audiencia que recibe la prueba testimonial ofrecida por la demandante, a la que comparece don Manuel Alejandro Ferrada Henríquez, quien previamente juramentado y sin tachas declara que conoce a don Carlos Muñoz Carranza alrededor de 30, 35 años y le consta porque han conversado los daños que él sufrió y sigue sufriendo las consecuencias de los apremios ilegítimos a los que fue víctima meses después del golpe de estado, en los momentos más álgidos y duros de la represión. Agrega que él estuvo preso en el Regimiento de Telecomunicaciones alrededor de un mes a dos meses no recuerda bien, fue sometido a torturas físicas y psicológicas, salió muy marcado de ese lugar, posteriormente él marchó al exilio y después que regresó a Chile fue detenido nuevamente por el servicio de inteligencia militar, fue acusado de alta traición a la familia militar. Relata que don Carlos aún sufre de traumas, psicológicos, de insomnio y tiene muchos traumas, tiene miedo a las personas uniformadas. Con respecto a cuanto sería lo justo el monto a pagar, en realidad no hay cifra, nunca van a pagar el daño al cual fue sometido y que actualmente sufre. Repreguntado, aclara que con respecto a la tortura física, fue sometido a sesiones de golpes y torturas a través de corriente. Y con respecto a las torturas psicológicas fue sometido a simulacro de fusilamiento, aislamiento, a negación de agua y comida y también le afectó mucho las amenazas a su familia. Y respecto de los daños, detalla sobre el insomnio que sufre él, no duerme con las pesadillas constantes que tiene por lo que le ocurrió a él como preso político y también le tiene miedo, horror, se paraliza cuando militares o carabineros en cualquier lugar en la calle o donde sea. Y con respecto a la parte física tiene problemas a la pierna izquierda, problemas en la espalda y en menor medida problemas de movilidad.

Comparece también, don Rodolfo Juan Caro Moya, quien previamente juramentado y sin tachas expone que en el contexto de la primera detención de don Carlos ocurrida en el año 73, en el momento más maquiavélico y represivo de la dictadura conlleva a que los apremios sufridos por don Carlos en ese momento tienen que haber sido de la mayor gravedad y configurado en apremios ilegítimos, tortura y vulneración de derechos. Agrega que don Carlos fue objeto de las mayores violaciones a los derechos



humanos que se pudieron cometer en ese momento, teniendo que salir al exilio, del que vuelve en el año 80, donde nuevamente cae detenido y sufre nuevamente el rigor de la represión de los brazos armados del Estado. Repreguntado respecto de los apremios ilegítimos sufridos por el demandante, aclara que don Carlos estuvo en el Regimiento Tacna, le parece el que está en San Bernardo, donde sufrió golpes, tortura, apremios psicológicos por parte de los efectivos militares en el recinto mencionado anteriormente. En cuanto a la manifestación de los daños sufridos por don Carlos Muñoz, como consecuencia de los apremios, detalla que conoce al demandante aproximadamente hace 15 años y en los encuentros de grupos de la Comisión Valech, él contaba sus problemas de salud que eran permanentes, hablaba algo de reflujo, la dificultad para dormir, la inseguridad emocional permanente, el tema de poder relacionarse con sus pares, miedo inexplicable a salir a la calle, comunicarse con otras personas; en algún momento mostró exámenes, tratamiento a los cuales él estaba sometido y los costos que para él tenía.

**SÉPTIMO:** Que como cuestión previa, se tendrá como hecho de la causa que los sucesos invocados como fuente de responsabilidad por el demandante están referidos a la detención y prisión ilegales, y torturas sufridos por don Carlos Alejandro Muñoz Carranza, efectuados por agentes del Estado en el período acaecido en nuestro país entre los años 1973 y 1990, perpetrándose tales hechos desde el 30 de septiembre al 10 de octubre de 1973 -lo que se encuentra debidamente acreditado en autos con los documentos acompañados, individualizados en el motivo tercero que antecede y con el reconocimiento del mismo por el demandado-, es de aquéllos que han sido catalogados como crímenes de lesa humanidad, que implican, por consecuencia, una necesaria violación a los Derechos Humanos, y que constituyen una violación grave a las normas internacionales de la materia; considerando, en todo caso y además, que la propia demandada ha fundado su defensa en declaración de dicha naturaleza.

**OCTAVO:** Que establecido lo anterior, se dirá también que la acción civil de indemnización de perjuicios por daño moral deducida en estos autos en contra del Fisco de Chile, tiene por objeto obtener una íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, conforme tratados internacionales



ratificados por Chile, y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

**NOVENO:** Que este derecho a la acción de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, que obligan al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5, y en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental.

**DÉCIMO:** Que dicho lo anterior, y habiendo sido opuestas por el demandado las excepciones reseñadas, deberá esta Magistratura referirse en primer término a aquéllas; y primeramente a la excepción de prescripción extintiva impetrada.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que a este respecto, se dirá que la obligación de los Estados de respetar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos da origen a su responsabilidad, que encuentra su base jurídica principalmente en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como también en el derecho internacional consuetudinario, particularmente en aquéllas normas que tienen un carácter imperativo o de *ius cogens*; dentro de las cuales cabe mencionar, como se dijo, los hechos invocados en autos por el actor como fuente de responsabilidad. En este sentido, es pacífico el punto referido a la imprescriptibilidad de la acción penal, desde la perspectiva de la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad; sin embargo no existe consenso en cuanto a extender dicha imprescriptibilidad a las acciones dirigidas a obtener reparación pecuniaria por los mismos hechos.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que para despejar el punto anterior, y, como se razonó, ha de concluirse, primeramente, que tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, la fuente de la responsabilidad civil no se encuentra en el Código Civil aplicable a las relaciones entre particulares o de éstos contra el Estado en el plano interno, sino en principios y normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que postulan que todo daño acaecido en el ámbito de aquéllos ha de ser siempre reparado integralmente.

**DÉCIMO TERCERO:** Que así, tratándose de un delito de violaciones a los Derechos Humanos, como acontece en estos autos, cuya acción penal persecutoria es



imprescriptible, carácter reconocido en diversas normas internacionales como también establecido por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema; no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna, pues aquello entorpece la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante de nuestro ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental; que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. En este sentido, un fallo de nuestro máximo Tribunal ha señalado que “cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones – civil y penal- y otorgarles un tratamiento desigualado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente” . Continúa el fallo indicando que “(…)dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado” .

**DÉCIMO CUARTO:** Que por otro lado, la acción civil deducida por el demandante en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos –y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile-, que obligan al Estado a reconocer y proteger el referido derecho a reparación íntegra, el que, en el ámbito internacional, no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al Estado mismo. En este entendido, las referidas normas imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, los que no pueden interpretar las normas de



derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación esas normas, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile; razón por la cual no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra que la responsabilidad del Estado por los ilícitos o violaciones de los Derechos Humanos, queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno; pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

**DÉCIMO QUINTO:** Que además, y como se ha señalado en el citado fallo del máximo Tribunal, “(…)debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley Nro. 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del recurso del Fisco de Chile –relativa a la prescriptibilidad de la acción civil emanada de violaciones a los Derechos Humanos- quedarían inaplicadas” .

**DÉCIMO SEXTO:** Que de lo anterior, ha de concluirse necesariamente que la acción civil de las víctimas de violación a sus Derechos Humanos, y otros legítimos titulares a ella, a fin de obtener la reparación íntegra del daño producido a consecuencia de hechos ilícitos perpetrados por agentes del Estado, no es prescriptible, de conformidad a la normativa del Código Civil.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que lo anterior encuentra su fundamento también en que los Derechos Humanos tienen como cimiento central la dignidad de la persona humana, la que, en palabras de Carlos Dorn Garrido, es aquél “valor intrínseco que impone al Estado un deber de respeto y protección, cuya justificación se basa en el hecho de que la existencia humana es más que sólo expresión biológica de la vida animal, ya que está unida a un ser dotado de conciencia de sí mismo y que es capaz de



trascender más allá de la contingencia presente” ; y es justamente esa dignidad humana que debe primar por sobre los fundamentos de seguridad y certeza jurídica que sustentan la prescripción a nivel nacional, toda vez que dichas finalidades no se avienen con la misión principal de los Derechos Humanos, que es amparar la dignidad de la víctima, bien jurídico superior y permanente para la humanidad.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que cabe precisar en este punto, que los tratados internacionales –ratificados por Chile–, como un proceso de positivización de la normativa internacional consuetudinaria, no han creado un sistema de responsabilidad, sino que, por el contrario, lo han reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido. Así, si bien la Convención Americana de Derechos Humanos, promulgada por el Decreto Supremo Nro. 873 de 23 de agosto de 1990, y publicado el 05 de enero de 1991, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 778 de noviembre de 1976, y publicado en abril de 1989 -ambas normas que contienen cánones referidos a la responsabilidad del Estado como la denominada “indemnización compensatoria” , del deber de reparar las consecuencias de la medida o situación que han configurado la vulneración del derecho o libertad conculcados y el “pago de una justa indemnización a la parte lesionada” -, no se encontraban vigentes en Chile al tiempo de los hechos alegados, pues fueron incorporados al derecho interno con posterioridad a la comisión de los crímenes descritos, ello no constituye obstáculo para la eventual aplicación inmediata de sus reglas, las que, desvinculadas de la prescriptibilidad, serían plenamente aplicables.

**DÉCIMO NOVENO:** Que dicho lo anterior, se referirá este Magistrado a la excepción opuesta del demandado relativa a la reparación integral del demandante, toda vez que aquél habría sido ya indemnizado, a través no sólo de la entrega directa de dineros, en relación a pensiones y bonos otorgados por el Estado a quienes han sido víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos y/o de sus familiares, sino también mediante el otorgamiento de ciertas prestaciones de salud y educacionales, y otras reparaciones simbólicas; aquélla excepción será rechazada. En efecto, como se dijo, y sin perjuicio del Oficio emitido por el Instituto de Previsión Social, la normativa internacional consagra una reparación integral del daño, que no se limita a la reparación a Estados



o grupos poblacionales, sino a personas individualmente consideradas. A criterio de esta Magistratura, las reparaciones a que ha hecho referencia la demandada tienen un rol colectivo; debiendo ser necesariamente complementadas con reparación material del daño moral individual sufrido por las víctimas. En este sentido, un fallo de la Corte Suprema reconoce que “El derecho ejercido por los actores, tanto para requerir la bonificación y la pensión mensual antes referidas como el que los habilitó para demandar en estos autos, proceden de fuentes diversas” .

**VIGÉSIMO:** Que en todo caso y sin perjuicio de lo razonado en el motivo que antecede, las denominadas “Leyes de Reparación” , entre las que se encuentran aquéllas mencionadas por la demandada en su defensa, si bien son un reconocimiento del Estado de Chile en su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones de Derechos Humanos o a sus familiares directos, en modo alguno impiden acceder ni son incompatibles con el derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado de obtener una indemnización distinta a una reparación de carácter meramente asistencial, como establecen las referidas leyes. Los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las citadas leyes no importan, en ningún caso, una renuncia o prohibición a las víctimas para acudir a la sede jurisdiccional demandando la reparación del daño moral provocado por agentes del Estado, como acontece en autos; claro que, cuestión aparte, será acreditar los supuestos de la indemnización de perjuicios que se solicita, según las reglas generales. Así ha sido razonado también por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol Nro. 796-16, de fecha 03 de junio de 2016, señalando que “la pretensión de la demandada de regular la indemnización por el daño padecido considerando los pagos ya recibidos del Estado contradice lo dispuesto en la normativa internacional señalada en la sentencia de casación que antecede y porque el derecho común interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, como también se razonó en la decisión de nulidad precedente, de modo que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas en función de preceptos de derecho patrio. La normativa invocada por el Fisco -que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que



aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que habiendo sido rechazadas las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, relativas al fondo de la acción deducida, corresponde ahora pronunciarse sobre la pretensión del actor a ser indemnizado por el daño moral provocado a raíz de la detención y prisión ilegítimas, y torturas sufridas por aquél, cometido por agentes del Estado, en un contexto de conflicto armado nacional.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que en relación a lo anterior, se dirá que el daño moral, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, a pesar de su naturaleza particular, debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que este constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil y consecuente indemnización de perjuicios que se demanda; derivándose la lógica consecuencia de que quien intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que a este respecto, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona, y que se imputa a otra. Así, el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, sentimientos o afectos de una persona.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que a fin de acreditar el daño moral padecido por el actor, que resulta esclarecedor en la materia, más allá del reconocimiento que se le ha otorgado a don Carlos Alejandro Muñoz Carranza como víctima de violación a sus Derechos Humanos, se rindió prueba testimonial, declarando dos testigos, quienes sin tachas y contestes afirman que el actor ha sufrido de daños psicológicos, desde el



evento de detención y tortura, lo que le ha provocado, entre otros, problemas para dormir del tipo insomnio y otros sociales, como el miedo de encontrarse con militares o carabineros en la calle, inseguridad y dificultad de relacionarse con otras personas.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que sin perjuicio de no contar con un informe psicológico de cómo las situaciones vividas por don Carlos Alejandro Muñoz Carranza, han afectado la sensibilidad física, sentimientos y desarrollo de aquél, tanto a nivel profesional como personal; puede presumirse, luego de establecido como hecho de la causa que el demandante fue detenido y prisionero ilegal, y además fue víctima de tortura ejecutada por agentes del Estado, que las consecuencias psicológicas de aquellos eventos surten hasta el día de hoy efectos en su persona, en sus relaciones de familia, sociales y laborales, y en el desenvolvimiento normal en su entorno y actividades diarias.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que de la prueba rendida, y según lo expresado precedentemente, se logra constatar la existencia de un daño moral causado al actor, que tuvo su origen en el delito de detención y prisión ilegal, y de tortura cometidos por agentes del Estado en su contra, en el contexto de una violación a sus Derechos Humanos, estableciéndose como hecho de la causa la aflicción que ha sufrido don Carlos Alejandro Muñoz Carranza por tales delitos; teniendo presente además que las secuelas físicas y psicológicas que ha sufrido y sufre hasta el día de hoy son de aquellas que permanecen de por vida, truncando el normal desarrollo de cualquier persona.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que habiendo sido determinada la existencia del daño moral sufrido por el demandante, corresponde ahora fijar su cuantía en dinero. Sin embargo, los antecedentes aportados no han sido suficientes para determinar el daño moral en cuanto *quantum* que le produjeron los delitos cometidos en su contra. Así, el daño moral deberá ser determinado en cada caso concreto y diferenciado, debiendo aplicar normas de la sana crítica; según la entidad, naturaleza y extensión del daño producido.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que en este punto, es dable señalar, a propósito de las alegaciones efectuadas en subsidio por el Fisco de Chile, en orden a no estimar la indemnización de perjuicios como una fuente de lucro para aquéllos que lo demandan, ni menos, considerar las facultades económicas del demandante o demandado para su



determinación; que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja, más aun cuando no se aportaron mayores antecedentes. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo, en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria, no cumpliendo con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido. Así, y como se indicó, la determinación del daño moral, en su *quantum*, se hará en consideración a la extensión del mismo, ello en mérito de las normas propias de la sana crítica, sentido común, y los antecedentes que obran en autos.

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que por su parte, en lo que se refiere a la alegación de la demandada en orden a que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya realizados, y de conformidad a lo razonado en los considerandos décimo noveno y vigésimo precedentes, los beneficios económicos recibidos por el actor por parte del Estado, en virtud de las leyes respectivas, son una forma de reparación colectiva que debe ser complementada con la reparación material del daño moral individual sufrido por las víctimas; y que no puede confundirse con las obligaciones impuestas por el derecho internacional, referidas a una íntegra reparación, como ampliamente se ha razonado en los motivos precedentes de esta sentencia. Así, habrá de ser desestimada la alegación del Fisco en tal sentido.

**TRIGÉSIMO:** Que además, es necesario precisar que la suma de dinero que se conceda en nada proscribe la aflicción sufrida por el actor debido a los ilícitos perpetrados en su contra por agentes del Estado, quienes, en razón de la calidad que ostentaban, debían velar por la cautela y seguridad de todos los ciudadanos, mandato que se vio quebrantado en los casos como el de marras.

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que ahora bien, y a fin de determinar el *quantum* indemnizatorio, este Sentenciador tiene presente los hechos invocados y acreditados, especialmente las torturas perpetradas en su persona, que no pueden sino considerarse como destructoras de su dignidad humana, ello sumado al contexto nacional en que ocurrieron los hechos que motivan la presente causa; por lo que avalúa el daño moral sufrido por el actor en la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos).

**TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Que en lo que respecta a reajustes e intereses, y en



atención al principio de reparación integral del daño, aquélla solicitud será acogida; sin embargo, desde las fechas según lo que se mencionará, acogiendo, en tal punto, la solicitud de la parte demandada. Así, las sumas a que ha sido condenado el Fisco deberán ser pagadas debidamente reajustadas, en la proporción que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia se encuentre firme y el pago efectivo. En cuanto a los intereses, las sumas a que ha sido condenado el demandado generarán intereses corrientes para operaciones reajustables desde la fecha en que quede firme la presente sentencia y hasta su pago efectivo.

**TRIGÉSIMO TERCERO:** Que las demás alegaciones y probanzas allegadas al proceso no modifican la decisión adoptada, por lo que su análisis resulta inoficioso, sin perjuicio de haberlas considerado al momento de resolver.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes y 38 de la Constitución Política de la República; artículo 1698 del Código Civil, Ley Nro. 19.123 y Nro. 19.992, Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, y demás pertinentes:

**SE RESUELVE:**

I.- Que **se rechazan las excepciones opuestas por el Fisco de Chile**, relativas a la prescripción extintiva, de reparación integral del demandante, y que la indemnización del daño moral debe considerar los pagos ya realizados por el Estado.

II.- Que, en consecuencia, **se acoge la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral** interpuesta por don Carlos Emilio Toloza Eguiluz, en representación de don Carlos Alejandro Muñoz Carranza, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar en favor de aquél la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos).

III.- Que la cantidad referida en el numeral anterior deberá ser pagada debidamente reajustada, en la proporción que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia se encuentre firme y el pago efectivo.

IV.- Que asimismo, la cantidad referida devengará intereses corrientes para operaciones reajustables, desde que la presente sentencia se encuentre firme y hasta la fecha de pago efectivo.



V.- Que no se condena en costas a la parte demandada, por estimar el Tribunal que ha tenido motivo plausible para litigar.

CONSÚLTESE, SI NO FUERE APELADA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO  
EN EL ARTÍCULO 751 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  
REGÍSTRESE

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE O POR CÉDULA

ROL C-103-2021

DICTADA POR DON LUIS OSVALDO CORREA ROJAS, JUEZ TITULAR  
DEL DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

AUTORIZADA POR Ximena Araya Pino, Secretaria Subrogante del Tribunal  
DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, en Santiago a un día del mes de febrero de dos mil veintitrés.

